



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Claudia Rocío Salazar López
DEMANDADOS	Colpensiones y Porvenir SA
RADICADO	05 001 31 05 003 2019 00745 01
TEMA	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Revoca sentencia

Medellín, 27 de octubre de 2023

En la fecha anunciada, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín procede a desatar los recursos de apelación y el grado jurisdiccional de consulta en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adopta el proyecto presentado por el magistrado ponente, que se traduce en la siguiente sentencia.

Reconocimiento de personería

Se reconoce personería a la abogada Juliana Araque Quiroz para actuar como apoderada inscrita de la firma Godoy Córdoba Abogados SAS para que represente los intereses de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA.

Se reconoce personería a las abogadas Eliana Moreno Pedroza, como apoderada principal, y Lina María Zapata Botero, como apoderada sustituta, para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con el memorial allegado.

Pretensiones

La demandante pretende que se deje sin efecto su afiliación a la AFP Porvenir SA y que se declare la ineficacia del traslado del Régimen de

Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) administrado por Colpensiones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

En consecuencia, solicita que se ordene a Porvenir SA trasladar todos los valores que se encuentren en su cuenta de ahorro individual más los rendimientos causados; que se ordene a Colpensiones recibir esos aportes y se autorice su regreso al RPMPD sin solución de continuidad y que se impongan costas procesales a las demandadas.

Hechos

Como supuestos fácticos relató que estuvo afiliada a Colpensiones entre el 30 de diciembre de 1986 y el 1 de mayo de 1987. En octubre de 1995 fue visitada por un promotor de la AFP Porvenir SA, quien le indicó que le convenía trasladarse al RAIS. Posteriormente, recibió información de que este régimen no era beneficioso para ella, por lo que solicitó a Porvenir SA una proyección de su pensión. El 10 de abril de 2019 dicha AFP le respondió que, cotizando el 100% del tiempo, a los 57 años de edad, obtendría una mesada pensional en cuantía de un SMLMV. Afirmó que elaboró una proyección pensional que arrojó como resultado que, si estuviera afiliada a Colpensiones, tendría un IBL de \$4.190.044,95, y, teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años y una tasa de reemplazo del 64%, obtendría una mesada pensional de \$2.681.628,77, suma superior a la indicada por la AFP.

Expuso que el 10 de septiembre de 2019 radicó una solicitud de traslado ante Colpensiones para regresar al RPMPD, con lo que agotó la reclamación administrativa. La entidad le respondió que su solicitud no era procedente ya que estaba a diez años o menos del requisito de tiempo para pensionarse, restricción que le era desconocida.

Contestaciones

Colpensiones

En su contestación manifestó que es cierta la afiliación al ISS en el lapso dicho; que no le constaba el traslado al RAIS ni la información suministrada por el fondo privado, así como los hechos relacionados con entidades ajenas a Colpensiones. Aceptó las solicitudes elevadas ante las demandadas, las respuestas dadas y el agotamiento de la reclamación administrativa.

Se opuso a las pretensiones dirigidas en su contra y propuso las excepciones de fondo que denominó: inexistencia de la obligación de traslado entre regímenes pensionales, imposibilidad de aplicar precedente judicial y la inversión de la carga de la prueba, falta de legitimación en la carga por pasiva, inexistencia de la nulidad o ineficacia del traslado a la AFP Porvenir SA, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones en casos de ineficacia de traslado de régimen, indebida aplicación del artículo 1604 del Código Civil, desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el RPMPD, equivalencia del ahorro o diferencias pensionales, devolución de aportes debidamente indexados, devolución de cuotas de administración debidamente indexadas, inexistencia del pago de intereses moratorios, prescripción, buena fe, compensación; imposibilidad de condena en costas y la genérica.

Porvenir SA

Expuso, frente a los hechos, que no le constaba la afiliación al ISS ni los relacionados con terceros ajenos a sí misma. Dijo que no era cierto lo dicho sobre la simulación pensional efectuada por la AFP, por lo que se ciñe a lo expresamente señalado en dicho documento; tampoco aceptó la proyección pensional presentada en el RPMPD, ya que no estaba debidamente soportada. Tampoco aceptó que los asesores no le brindaron a la afiliada información completa acerca del RAIS, pues, al contrario, el traslado cumplió las obligaciones vigentes para la época, tras una debida asesoría.

Para oponerse a las pretensiones presentó las excepciones de fondo de prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa, inexistencia de la obligación y buena fe.

Sentencia de primera instancia

El 30 de enero de 2023, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, declaró que Porvenir SA faltó a la obligación de diligencia debida y buen consejo que debió desplegar a favor de la demandante en el momento del traslado, al no darle a esta la información amplia, veraz y oportuna en ese momento y durante toda la afiliación.

Declaró que Porvenir SA causó menoscabo, es decir, disminución o limitación a la seguridad social en pensiones de la demandante. Por lo tanto, la declaró profesional y constitucionalmente responsable. En consecuencia, declaró la inaplicación constitucional (art. 53, inc. 5 CP y art. 172 Ley 100 de 1993) de los efectos jurídicos de pérdida del RPMPD acaecido en cabeza de la actora, cuando se trasladó de Cajanal a aquella AFP. En su lugar, declaró que ella seguía inmersa en el RPMPD, pero a cargo de Porvenir SA. A la vez, absolvió de todas las pretensiones a Colpensiones.

Le ordenó a Porvenir SA que reconociera, liquidara y pagara a la actora la pensión de vejez bajo las reglas del RPMPD, dentro del mes siguiente a que ella la solicitara, una vez cumplidos al menos los 57 años y adjuntando el certificado de retiro laboral. También dispuso que la misma AFP, dentro del mes siguiente a la fecha en que reconozca, liquide y pague la pensión de vejez bajo el RPMPD a la demandante, solicite por escrito a Colpensiones la elaboración del cálculo actuarial pensional con miras a obtener la subrogación pensional. En consecuencia, ordenó a Colpensiones que dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que lo solicite por escrito Porvenir SA, elabore el citado cálculo actuarial y dentro de ese mismo lapso, lo presente por escrito para que la administradora del RAIS, dentro del mes siguiente al que reciba por escrito el valor del cálculo actuarial pensional, proceda al pago real y efectivo de este ante Colpensiones.

Por otra parte, advirtió a Porvenir SA que, mientras no pagara el cálculo actuarial pensional, quedaba obligada a continuar pagando la pensión de vejez bajo el RPMPD a la demandante. Indicó que Colpensiones subrogaría en tal obligación a Porvenir SA desde el momento en que real y efectivamente recibiera el pago del cálculo actuarial pensional.

Luego, autorizó a Porvenir SA a enjugar parte del valor del cálculo actuarial que le ordenó pagar tomando para sí los ahorros pensionales de la afiliada, más los rendimientos financieros, el bono pensional y cualquier otra suma de dinero que llegare al haber de la cuenta de ahorro pensional de ella.

Declaró no prósperas las excepciones propuestas por Porvenir SA, salvo la de intransmisibilidad de responsabilidad de las AFP a Colpensiones, presentada por esta última.

Por último, condenó en costas procesales a Porvenir SA.

Expuso que las entidades que realizan gestión fiduciaria, como las AFP, no tienen obligación de resultado, ya que su actividad económica depende de los vaivenes financieros de la economía, pero, a cambio de no tener que garantizar un resultado, tienen una obligación instrumental o de medio, de diligencia debida o buen consejo, que se concreta en el hecho de que las entidades financieras deben asesorar e informar ampliamente al usuario del sistema financiero de los riesgos que corre, de las características, de los contratos o actos jurídicos que asume; también deben verificar las condiciones particulares y específicas que atañen al ahorrador pensional, a su vez, deben hacer un parangón entre las características, ventajas y desventajas de ambos regímenes.

Consideró que las administradoras de pensiones desarrollan una actividad financiera específica de gestión fiduciaria, y, conforme lo dispone el Decreto 720 de 1994, en su artículo 12, deben dar un debido consejo y asesoría, adquiriendo el deber de información, como lo

dispone el Decreto 1161 de 1994, en su art. 3. Agregó que el fondo privado, al no dar información clara y oportuna, es el que debe responder por esta falta, sin que se pueda obligar a un tercero, como lo es Colpensiones, a recibir los dineros y rendimientos, para que sea quien responda, pues la actividad financiera de los fondos de pensiones no es gratuita sino onerosa, ya que se desarrolla con el ánimo de obtener beneficios. Especificó que, al tenor del art. 10 del Decreto 720 de 1994, si las administradoras no dan información suficiente, deben estar prestas a responder por ello, sin trasladar la carga al RPMPD, toda vez que no pueden beneficiarse de su propia culpa; que el art. 271 de la Ley 100 de 1993 contiene una sanción administrativa y pecuniaria, de allí que se faculte a los ministerios a cobrar una multa a quienes han violado el derecho a la seguridad social de afiliación.

Por último, expresó que, si bien las administradoras privadas no pagan pensiones de prima media, por haber causado un daño, y al declararse la ineficacia, deben asumir que el actor tiene derecho a pensionarse bajo los parámetros de ese régimen, pero lo que se debe ordenar es que, a título de indemnización de perjuicios, el fondo privado devuelva un cálculo actuarial por subrogación pensional que cubra la totalidad de las actividades financieras, económicas y logísticas que debe realizar Colpensiones para el pago de la mesada pensional.

Apelaciones

Porvenir SA

En su recurso, solicita que se revoque la decisión de primer grado y, en consecuencia, que se la absuelva de las condenas impuestas. En la sustentación del recurso argumenta que esta AFP cumplió con el deber de información a la actora, de conformidad con la normativa vigente en el momento del traslado, pues le brindó la información necesaria y obligatoria para ese entonces, a partir del formulario de afiliación. Y las exigencias actuales no se pueden aplicar de manera retroactiva.

Sostiene que la parte demandante incumplió el deber de diligencia y cuidado de sus propios negocios, por lo que no puede beneficiarse de su culpa o negligencia, pues no acudió a los canales de comunicación de Porvenir SA ni de Colpensiones, y, pese a que quedó demostrado que recibió la comunicación de reasesoría enviada por Porvenir SA, no acudió a los fondos de pensiones para retornar al RPMPD y evitar el proceso judicial. Además, no se probó ningún perjuicio que deba resarcir la AFP, ya que no está pensionada. Solicita que no se tengan en cuenta los conceptos de gastos de administración, gastos en seguros previsionales y FGPM, toda vez que ya no se encuentran en el patrimonio de la AFP y cumplieron con el propósito de generar rendimientos y frutos reflejados en la cuenta de la afiliada y en la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte, amparados hasta la actualidad y no pueden retrotraerse por la cobertura del servicio ya se ha prestado.

También solicita que se tenga en cuenta la prohibición de proferir sentencias *extra petita*, es decir, aquellas en las que se emiten condenas por pretensiones distintas de las previstas en la demanda, situación que se presenta en este proceso y que desarrolla el principio de congruencia, con lo que el juez se extralimitó en sus funciones

Afirma que, si bien en la sentencia de primera instancia se manifiesta que las AFP incumplieron su deber de guardar los soportes documentales de los afiliados, pues para la fecha solo se exigía el formulario de afiliación, lo cierto es que Porvenir SA recibió a la demandante como afiliada sin que tuviera la oportunidad de rechazar su traslado. Añade que se debe tener en cuenta que la actora hizo varios traslados entre fondos privados, con lo cual reiteró la voluntad de pertenecer al RAIS. Frente a las consecuencias de la ineficacia, advierte que, si el tribunal declara la ineficacia del traslado, debe tener en cuenta que las que impuso el juez no corresponden a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, las AFP deben trasladar todos los emolumentos que tengan en la cuenta de ahorro individual, como lo señala el art. 20 de la Ley 100 de 1993.

Colpensiones

Expone que no está de acuerdo con la sentencia, toda vez que el cálculo actuarial se da en el caso de omisión en la afiliación, es decir, cuando nunca se afilió a su trabajador; por consiguiente, al solicitar la pensión, este es sorprendido cuando le informan que faltan algunos períodos por cotizar y es ahí cuando la entidad realiza un cobro coactivo y el empleador omiso remite la información con pruebas cuales son los períodos adeudados.

Advierte que no hay un real estudio financiero, pues para que se pueda hacer el cálculo actuarial tiene que haber un incremento crediticio. Señala que no se sabe el valor de la pensión, ya que la actora no está activa en el RPMPD, y se desconoce el IBL de los últimos 10 años, así como el IBC durante los últimos 10 años y sobre que salarios realmente hizo sus aportes, por ello, solo se está frente a una expectativa pensional. Por esa razón, señala que no le es dable a Colpensiones subrogar la pensión en caso del pago del cálculo actuarial.

Agrega que no son compatibles los regímenes, pues son excluyentes y tienen una forma de liquidar muy diferente; que el cálculo actuarial solo se puede comenzar a analizar desde la Ley 100 de 1993; que el único documento que se pedía para la época era el formulario de afiliación; que el principio de la responsabilidad va encaminado a que el afiliado también debe de asesorarse y acudir ante las entidades para que le den una asesoría de su pensión, pero no se puede pretender que el fondo tenga la obligación de decirle cuál es su mejor opción; que no comparte que entre Colpensiones y Colfondos SA debe haber un intercambio de información, porque este únicamente se da en cumplimiento de funciones públicas.

Solicita que no se tengan en cuenta las órdenes dadas a Colpensiones referentes a la subrogación pensional, por cuanto no es posible y la ley no permite que esta asuma la responsabilidad de la pensión; que el despacho dice que lo público es de todos, pero controvierte esta decisión, por cuanto el análisis financiero realizado está generando un

grave daño a los recursos públicos, es decir, un desequilibrio económico. Solicita que no se dé la inaplicación constitucional como tal de la ineficacia del traslado, porque aquí no se está vulnerando ningún derecho al afiliado; que hay que tener en cuenta los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en los cuales ordenan un retorno automático al RPM, esto ha dejado sin bases ni fundamentos legales para interponer acciones legales. Finalmente, que se debe revocar este caso de ineficacia por inaplicación constitucional, debido a que no se está violentando ningún derecho fundamental y, por ende, se debe absolver a esta apelante de las órdenes impuestas.

Demandante

Presenta recurso de apelación señalando que, en principio, el presente caso tiene todos los supuestos fácticos y jurisprudenciales para darle aplicación al precedente de la Corte Suprema de Justicia referido a todos los procesos de ineficacia de la afiliación, por lo que es procedente aplicarlo, que se trata de una afiliada que desconoce de manera ostensible los elementos necesarios y suficientes para conocer las implicaciones del acto jurídico de traslado, es decir, desconoce características, accesos, servicios, ventajas y eventuales desventajas tanto del RAIS como del RPMPD; que nunca se le explicaron aspectos básicos del RAIS, como el capital necesario, los montos, así como también desconoce los requisitos para acceder a condiciones específicas del sistema pensional como la devolución de saldos o su figura análoga del RPM como la indemnización sustitutiva; que el deber de información no fue regulado de manera posterior, sino que nació de manera simultánea con las AFP, por lo tanto, no se puede separar esta obligación intrínseca que tienen con sus afiliados de informar de manera profesional, neutral y oportuna, y que, por el contrario, solo desplegaron maniobras comerciales para captar afiliados para cumplir con sus metas financieras previstas por juntas directivas; que en sus contestaciones, las demandadas indican haber cumplido con el deber de información sin tener ningún tipo de soporte, pero se quedan cortas en desvirtuar las negaciones de carácter indefinido y que el hecho de realizar traslados horizontales, casi de manera automática y por el

simple hecho de actualizar datos o trasladarse, no tiene sustento jurídico y la Corte ha sido clara que la única forma de desvirtuar lo dicho por el demandante al decir que no fue debidamente informado, es a través de los medios de prueba puestos a su disposición.

Alegatos

Demandante

Expresa que es procedente declarar la ineficacia, como quiera que las entidades demandadas no lograron demostrar que se otorgó una información clara y completa, toda vez que el único documento que se aportó fue el formulario de afiliación, demostrando que las AFP dejaron de suministrar información suficiente, amplia y oportuna respecto del traslado con el fin de generar decisiones informadas; que el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador de cada uno de los regímenes pensionales; que en la sentencia CSJ SL14522-2019 se manifestó que con la creación de los fondos de pensiones surgió la obligación de brindar información a sus clientes y usuarios y esta no puede ser sustituida por el diligenciamiento de un formulario de afiliación. Por lo anterior, solicita que se confirme la decisión de primera instancia.

Colpensiones

En sus alegatos solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, toda vez que los fondos están en una situación probatoria complicada respecto del esclarecimiento de los hechos; que la afiliación a Colfondos SA fue libre, voluntaria, espontánea y sin coacción alguna, pues firmó el formulario de afiliación, único documento exigible para la época; que no se pueden imponer cargas procesales a las AFP que no están obligadas a soportar, pues esto genera un detrimento al sistema, porque los recursos trasladados son insuficientes para sostener una pensión, atentando contra el principio de sostenibilidad financiera.

Añade que existe una prohibición de traslado entre regímenes, dado que, a la fecha, el demandante cuenta con 61 años de edad y cuando se interpuso la demanda, en el año 2020, tenía la edad de 59 años, de manera que el afiliado no podría trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; que se debe declarar la nulidad de todo lo actuado, por competencia jurisdiccional, dado que este proceso debió ser conocido y debatido dentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues el demandante ostenta la calidad de servidor público, dado que tiene el cargo de escribiente en un juzgado, hecho que no fue informado, faltando así a la verdad procesal; que se opone a la declaración de la ineficacia por cuanto no hay fundamento alguno, ocasionando un detrimento patrimonial a Colpensiones; que con lo que reposa en la cuenta de ahorro individual no alcanzaría a pagar más allá de 5 o 6 años, vulnerando el principio de solidaridad financiera del RPMPD.

Expone que la responsabilidad de escoger el régimen está en cabeza del afiliado y no de los fondos; que en ningún momento se le está violentando el derecho a la seguridad en pensiones; que declarar la ineficacia desconocería los preceptos constitucionales; que no se condene en costas a Colpensiones, puesto que fue un tercero que no tuvo injerencia en el traslado y que los valores a devolver serán insuficientes para el pago de la mesada pensional más allá de los 6 años, por tal razón se debe reintegrar conceptos como la cuenta de ahorro individual, intereses y rendimientos, cuotas de administración, fondo de pensión de garantía mínima, porcentajes de seguros previsionales, gastos de administración e indexación.

Porvenir SA

Manifiesta que se debe absolver a Porvenir SA de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, pues no existe obligación a cargo de esta entidad. Que cuando se realizó el traslado horizontal a esa AFP se cumplió con el deber de información necesaria y obligatoria establecida para la época dentro del mismo formulario, el cual es revisado y

aprobado por la Superintendencia Financiera; que Porvenir SA ha hecho campañas masivas y ha expedido comunicados de prensa informando cambios normativos; que a la actora se le brindó una asesoría clara, completa y suficiente, pues recibió la información necesaria para tomar una decisión informada; que las condiciones del RAIS son impuestas por la Ley 100 de 1993; que, teniendo en cuenta que no existieron razones que permitieran concluir que faltó a su deber de emitir una asesoría clara, comprensible y suficiente y que no le fue interpuesta condena alguna por concepto de costas procesales, solicita que se confirme la decisión. Adiciona que ha obrado de buena fe en todas sus actuaciones y con sujeción a las normas vigentes.

CONSIDERACIONES

Los problemas jurídicos que debe resolver la Sala, conforme a los recursos interpuestos y en el grado jurisdiccional de consulta que cobija a Colpensiones, son: (i) determinar si el juez desbordó las facultades *ultra* y *extra petita* y el principio de congruencia según el objeto del litigio; (ii) si el acto jurídico de afiliación de la señora Claudia Rocío Salazar López a Porvenir SA fue válido o si es ineficaz; (iii) consecuentemente, si prospera la declaratoria de ineficacia, se deberá analizar la orden dirigida al fondo privado de reconocer la prestación económica de vejez como si fuera del RPMPD, y, posterior a ello, solicitar el cálculo actuarial a Colpensiones con miras a la subrogación pensional o, por el contrario; (iv) se determinará si los fondos privados deben trasladar todos los conceptos de la cuenta individual a Colpensiones para que sea quien asuma la afiliación y la prestación económica de vejez; (v) por último, se analizará si opera o no la excepción de prescripción de la acción.

i. Facultades ultra y extra petita y principio de la congruencia.

El art. 42 del CGP, en lo que respecta a los deberes del juez, establece en el numeral 5.º lo siguiente: «Adoptar las medidas autorizadas en este

código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia».

Por su parte, el art. 281 del citado código, aplicable en materia laboral por disposición del canon 145 del CPTSS, señala: «La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».

Con respecto a las facultades *ultra* y *extra petita*, indica el artículo 50 del CPTSS que «el Juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados».

Conforme a las normas enunciadas, debe tenerse en cuenta que para la procedencia de los fallos *ultra petita* es necesaria la verificación de dos condiciones, tal y como se ha establecido en sentencia C-662 de 1998; estas son: (i) que los hechos en que se sustenta se hayan debatido dentro del proceso con la plenitud de las formas legales y (ii) que estos estén debidamente probados.

Aplicando lo anterior al caso de autos, considera la sala que el juez de primera instancia extralimitó sus facultades, toda vez que las pretensiones contenidas en la demanda iban dirigidas estrictamente a que se declarara la ineficacia de la afiliación al RAIS, con el consecuente traslado a Colpensiones de los recursos acumulados en los fondos privados.

De esta manera, cuando la sentencia de primera instancia declaró la inaplicación constitucional de los efectos del traslado del RPMPD al RAIS y encontró probado un perjuicio económico a la parte accionante, ordenándole al fondo privado que reconozca la pensión de vejez bajo las

normas del Régimen de Prima Media, más la elaboración de un cálculo actuarial pensional con miras a subrogación de ese deber, y a sabiendas que se trata de pretensiones ajenas a la demanda, frente a las cuales el fondo privado nunca pudo ejercer una defensa técnica, se genera una evidente vulneración al derecho fundamental al debido proceso y a las garantías de contradicción y defensa, razón por la cual, la sentencia emitida en primera instancia deba ser revocada.

En igual sentido se procederá en cuanto a los perjuicios declarados por el juez, ya que, fuera de ser necesaria su demostración para que se genere la indemnización, en las pretensiones de la demanda no obra solicitud de reconocimiento de reparación alguna, como tampoco fueron acreditados por la parte activa los daños que el juzgador pretendió resarcir, a más de que el fondo accionado no tuvo la posibilidad de ejercer el derecho de defensa frente a esa decisión.

ii. Acto jurídico de afiliación y precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional

La sala comienza por hacer un recuento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia acerca del tema.

La Corte advierte que el traslado de régimen debe estar precedido de toda información relevante para la toma de la decisión. Agrega que es necesario que el fondo de pensiones proporcione, a quien pretenda captar como su afiliado, una información suficiente, completa y clara sobre las reales implicaciones de dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras, y señala que la ineficacia es una consecuencia prevista en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 para aquellos casos en que el fondo omita suministrar información que favorezca la libre y voluntaria selección de régimen. Tal acto indebido, según esa corporación, tiene como consecuencia no producir sus efectos propios. Además, indica que el Estatuto Financiero de la época, en los artículos 97 y siguientes, consagró que las administradoras debían obrar, no solo conforme a la ley sino

soportadas en los principios que orientan la buena fe, de manera que se sanciona la usencia en el suministro de la información relevante.

Más adelante, la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) Esa información debe ser completa y comprensible.
- (iii) Dichos datos deben proporcionarse con prudencia, bajo el parámetro del buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que le perjudique.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado, independientemente del esquema pensional que lo cobije.

Así las cosas, lo dicho constituye sustento que permite deducir las siguientes reglas:

- (i) Las administradoras de pensiones tienen a su cargo la obligación de información, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
- (ii) La información del traslado de régimen debe ser de transparencia máxima, detallada y documentada acerca de la incidencia que pueda tener frente a los derechos prestacionales del afiliado, de modo que no basta con

explicarle solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, sino, además, el monto de la pensión que en cada uno de ellos proyecte la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y la declaración de aceptación de esa situación.

- (iii) La carga de la prueba de demostrar que se informó de forma detallada, clara y documentada recae en la administradora de fondos de pensiones.

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo con las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos:

- (i) Desde la fundación de las AFP.
- (ii) Desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 incorporado en el Decreto 2555 de 2010.
- (iii) Y, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015. Y en la circular 16 de 2016, la cual entrega instrucciones generales para la remisión de información financiera para efectos de inspección, vigilancia y control.

Esta decisión tiene como soporte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia plasmada en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519-2015; 47125 de 2017, SL19447-2017 y SL17595-2017; SL3496-2018 y SL4989-2018; SL1421-2019, SL1452-2019, SL1688-2019, SL4360-2019 y SL4426-2019; STL3716-2020, STL4001-2020, STL4084-2020, SL2611-2020, SL2877 -2020, SL4811-2020; SL1217-2021, SL782-2021, y SL445-2022.

Al aplicar ese precedente al caso objeto de estudio, sobre los pormenores que rodearon la afiliación de la demandante, del

interrogatorio de parte se desprende que la actora firmó el formulario de afiliación a Porvenir, en el año 1995. Que su motivación para trasladarse fue la promesa efectuada por el fondo de pensionarse más joven, y que le informaron que esta sociedad tenía muy buen respaldo económico. Que nunca recibió una reasesoría pensional por Porvenir ni se le hizo una simulación pensional. Y, que se quiere regresar a Colpensiones, ya que le han dicho que le conviene más el fondo público.

Ahora, sobre la carga de la prueba, la sentencia CSJ SL4426-2019 expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa de que el afiliado plantea una negación indeterminada—que no recibió información idónea—, luego, es la AFP a quien le corresponde dar certeza de que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que está en una mejor posición de ilustrar al juzgador, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado. Asimismo, con base en toda la jurisprudencia citada, debe decirse que la carga de la prueba recae en la administradora puesto que, como entidad especializada, cuenta con la experticia necesaria para que, a través de sus asesores, se dé a conocer a los afiliados que pretende captar cuáles son los pormenores de sus situaciones pensionales y las consecuencias que trae elegir el régimen al que les proponen afiliarse.

En tal virtud, sucede que las afirmaciones de la demandante no fueron desvirtuadas procesalmente por Porvenir SA, toda vez que, pese a que se anexaron los formularios de afiliación de folios 39 del PDF 03 y folio 33 de la contestación, que fueron suscritos por la actora, lo que en un principio indica que existió asesoría acerca de cuáles eran los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro, lo cierto es que estos documentos no son prueba suficiente para determinar si, efectivamente, al accionante se le dispensó una completa asesoría acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro.

Debe reiterarse que la labor de los asesores de los fondos privados, en la etapa prenegocial —anterior a la materialización del consentimiento—, consiste en brindar información transparente, completa, detallada y comprensible, puesto que lo que ahora se revisa es si la AFP que pretendía captar a la demandante como su afiliada cumplió con los imperativos profesionales de información.

Vale la pena manifestar que el hecho de que la demandante firmara el formulario de vinculación, donde se hace constar que escogió el régimen de ahorro individual de forma «libre, espontánea y sin presiones», no implica que el actor conociera las consecuencias que implicaba el cambio de régimen pensional.

No pasa por alto esta Sala que la ineficacia es una respuesta a la transgresión de un deber legal de suministrar información, y ello implica que el acto jurídico declarado ineficaz carece de vida desde el principio, por tanto, no pudo producir ningún efecto, luego no es procedente analizar el caso como lo pide la apoderada de Colpensiones en sus alegatos, esto es, con base en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en lo que tiene que ver con el traslado de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad pensional.

Con respecto a la información que se le debía brindar a la demandante para la fecha de traslado, en las providencias de la CSJ, SL1688-2019, SL4360-2019 y SL4426-2019 se establecieron unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el movimiento; se establecen en lo temporal los siguientes momentos: primer periodo, desde la fundación de las AFP; segundo momento, desde la expedición de Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y, tercer momento, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el primer traslado al RAIS fue el 11 de enero de 2002 a Colfondos, lo que se corresponde con el primer ciclo, para el cual, según lo expresado en la sentencia SL1452-2019, la

obligación de la administradora privada demandada era la de brindar una información necesaria y transparente.

Sobre dichas obligaciones de las administradoras de pensiones, es categórica la sentencia SL782-2021, en donde la Corte Suprema de Justicia indicó que, según su línea jurisprudencial, se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

[...] i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

Según lo anterior, Porvenir SA, no cumplió con la carga de probar que en la etapa previa a la suscripción del formulario de afiliación, la asesoría a la actora hubiese sido clara, detallada y concreta en relación con su situación particular, por tanto, debe concluirse que desde entonces el traslado resulta ineficaz, lo que implica que la afiliación válida es la anterior, la efectuada al RPMPD, de modo que se revocará la providencia de primera instancia, por no existir libertad informada para llevar a cabo el traslado o la afiliación; en su lugar, se declarará la ineficacia de la afiliación al RAIS, en los términos del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, entendiéndose que el actor siempre estuvo afiliado al RPMPD administrado en la actualidad por Colpensiones, sin solución de continuidad, conforme lo ha expuesto la línea jurisprudencial del órgano de cierre de la justicia ordinaria laboral.

Ahora bien, es claro que la demandante pertenecía al régimen administrado por Cajanal con anterioridad al año 1995 (ver página 7, archivo 021); dicho fondo fue suprimido a través de la Ley 1151 de 2007, cuyo artículo 155 consagró que Colpensiones, como administradora del RPMPD, se encargaría del reconocimiento de las

pensiones de vejez, una vez fuera suprimida Cajanal, por ello, se entiende que el traslado de la actora debe ser a Colpensiones, en tanto se declarará la ineficacia del traslado.

iii. Orden dirigida al fondo privado y subrogación pensional

En cuanto a la orden que el juez le dio a Porvenir SA, consistente en pagar la pensión de vejez, una vez la actora eleve la solicitud, pero según los mandatos del RPMPD, y con miras a la subrogación pensional con Colpensiones, la Sala debe reafirmar que, al declararse la ineficacia, se genera como resultado que la afiliación válida es la efectuada al régimen administrado por esta última entidad, por ello, debe entender que la demandante siempre permaneció afiliada a esta, sin interrupciones, teniendo en cuenta que desde las pretensiones de la demanda y, posteriormente, en la fijación del litigio, se solicitó dejar sin efecto la afiliación a los fondos privados, para que, en su lugar, todo se retrotrajera al estado anterior a ese movimiento.

Por consiguiente, la ineficacia del acto jurídico de vinculación al RAIS no produce efecto alguno, lo que implica la reactivación de la afiliación al RPMPD y, consecuentemente, la devolución a Colpensiones, por parte de los fondos privados, de todos los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación de la actora, como cotizaciones, rendimientos, cuotas de administración, prima de reaseguro de Fogafin y primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, debidamente indexados y, además, lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Es importante manifestar que no obra en la ley ni en sus decretos reglamentarios una regulación que obligue a la AFP, en casos como este, a pagar un cálculo actuarial destinado a la subrogación pensional, en tanto que la función principal de esas entidades consiste en administrar los aportes de sus afiliados, mientras que el cálculo actuarial se destina, en materia pensional, a corregir falencias tales como las cometidas por los empleadores que no afiliaron a su

trabajador a la seguridad social o que incumplieron la obligación de reportar la novedad de ingreso de un nuevo trabajador a su empresa.

Dicho cálculo se paga a través de una reserva actuarial o un título pensional, por ejemplo, con base en los literales b), c), d) y e) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1887 de 1994, cuyo artículo 1.º establece: «la metodología para el cálculo de la reserva actuarial o cálculo actuarial que deberán trasladar al Instituto de Seguros Sociales las empresas o empleadores del sector privado que, con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones, tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, en relación con sus trabajadores que seleccionen el RPM»; asimismo, el inciso sexto del artículo 17 del Decreto 3798 de 2003 señala:

En el caso en que, por omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores a partir de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, o con anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligación de afiliarlos o de cotizar estando obligado a hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y la fecha de afiliación tardía, sólo será procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el título pensional correspondiente, calculado conforme a lo que señala el Decreto 1887 de 1994.

Ahora, frente a la obligación de aceptar la subrogación a través de la conmutación pensional, a partir de un cálculo actuarial pagadero por Porvenir SA a Colpensiones, la Resolución 249 de 2013, emitida por esta última entidad, señala: «la conmutación pensional es un mecanismo jurídico y contable, a través del cual una entidad empleadora, para lograr la normalización de su pasivo pensional, transfiere a un tercero, mediante el pago de una suma establecida, la responsabilidad jurídica del pago de pensiones a su cargo». De lo anterior se desprende que dicha figura solo se ajusta al caso de un empleador hacia una entidad administradora de pensiones.

Conforme a lo expuesto, la conmutación pensional no está prevista para que una AFP, previo pago del correspondiente título pensional, subrogue una supuesta obligación de pago de una pensión de vejez en

Colpensiones. Por lo tanto, debe advertirse que la reglamentación de aquella figura financiera está diseñada para la formalización de pasivos pensionales de empleadores, de modo que no es un instrumento útil para la finalidad que le asignó el juez de primer grado. Como consecuencia, también se revocará la sentencia revisada en lo que se refiere al reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Porvenir SA, como si se tratase de una administradora del RPMPD; la misma suerte se deparará a la orden de emisión de un cálculo actuarial para subrogación pensional.

De igual forma, con respecto al reconocimiento de la pensión de vejez, vale aclarar que la accionante, por ministerio de la ley, está plenamente facultada para solicitar la prestación económica ante la administradora pensional a la que siempre ha debido considerarse vinculada.

iv. Efectos de la ineficacia y conceptos a devolver por los fondos privados

En relación con los efectos de la ineficacia y los recursos que deben devolver los fondos privados, la jurisprudencia ha indicado que es menester aplicar el artículo 1746 del Código Civil, que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que, al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio desinformado de régimen pensional. Ello implica que la AFP que dio lugar a esa decisión traslade a Colpensiones: (i) la totalidad del capital ahorrado, (ii) los rendimientos financieros obtenidos y (iii) los gastos de administración y comisiones, estos, con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos debieron ingresar al RPMPD.

Tampoco puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen administrado por Colpensiones, entidad que debe recibir una suma de dinero equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la persona afiliada no se hubiese

trasladado. En ese orden, es claro que, de acuerdo con la forma en que se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputaron a gastos de administración, pagos a compañías aseguradoras y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, lo que implica que la AFP debe devolverlas en su integridad.

Pues bien, ante las apelaciones interpuestas hay que anotar que la ineficacia es una respuesta jurídica a la transgresión de un deber legal, ello implica que el acto jurídico declarado ineficaz carece de vida jurídica, y, por tanto, no produce ningún efecto, según lo ha precisado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia SL4360-2019, en la que indicó que «la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado». Además, en el fallo CSJ SL3464-2019 se señaló:

La Sala ha adocitrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.

Así pues, es necesario aclarar qué conceptos deben ser devueltos por la AFP que administra la cuenta individual de la actora ante la declaratoria de ineficacia del traslado. En ese sentido, a partir del precedente jurisprudencial, esta Sala ha identificado los siguientes conceptos:

- i. Capital ahorrado: Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme lo dispone el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM¹.
- ii. Rendimientos: En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan en los términos del

mismo canon legal. Debe destacarse, con respecto a estos, que desde la sentencia dictada por la CSJ en el radicado 31989 del año 2008, su devolución se sustenta en que se debe el mayor valor de la cosa que aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador².

- iii. Los gastos de administración³, concepto consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros del Fogafin y los pagos correspondientes a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a Colpensiones, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado dos razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios⁴ y (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema⁵.

Finalmente, en este aspecto se recuerda la necesidad de que estos conceptos sean asumidos por la administradora con cargo a su propio patrimonio y que deben entregarse debidamente indexados⁶.

- iv. Los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima: el pago de estos valores, propios del RAIS y consagrados en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, no encuentra un equivalente en el RPMPD, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a ese fondo deben ser devueltos al RPMPD bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016⁷.

Por lo anterior, Porvenir SA, fondo al que actualmente se encuentra vinculada la actora, deberá trasladar lo correspondiente a las cotizaciones consignadas en su cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros, los gastos de administración, que se componen del pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros del Fogafin y los pagos correspondientes a la AFP por su gestión; todos estos conceptos deben ser debidamente indexados con cargo a sus propios recursos y, además, deberá trasladar lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, conforme lo dispone el art. 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016. En este sentido, se debe ordenar a Protección SA que traslade a Colpensiones todos estos conceptos.

Por otra parte, al revisar la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta que cobija a Colpensiones, y atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del sistema, Porvenir SA deberá devolver los gastos de administración que se componen del pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros del Fogafin siempre y cuando dentro del período de afiliación se realizaran estos descuentos, y los pagos correspondientes a la AFP por su gestión, todos debidamente indexados con cargo a sus propios recursos. Se advierte que esta indexación no es equiparable a la figura de los rendimientos financieros generados por un fondo privado, los cuales surgen del resultado de las inversiones que hizo el fondo en un período establecido que, sin lugar a dudas, también pueden generar una desvalorización en su rentabilidad, conforme a la situación económica del entorno, lo que puede afectar el capital de las cuentas pensionales individuales, por lo tanto, al decretarse la ineficacia del traslado, estos conceptos deberán ser actualizados en el momento del pago, como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en sus providencias SL1688-2019, SL1689-2019, SL782-2021, SL1187-2021 y SL1197-2021.

En conclusión, se ordenará a Porvenir SA que traslade a Colpensiones todos estos conceptos generados durante el tiempo que administró los intereses pensionales de la promotora del proceso.

Para dar soporte a las ordenes anteriores, no se pueden pasar por alto las providencias de la Corte Suprema de Justicia SL843-2022, SL755-2022 y SL756-2022, que imponen a las AFP del RAIS la obligación de que, junto con las sumas objeto de traslado, se entregue la información completa, donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás datos relevantes que los justifiquen. Así pues, para esta Sala es válido que se exija claridad en cuanto a los valores y conceptos que ha de devolverse al RPMPD, por lo que se dispondrá que los fondos privados, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a Colpensiones, los discriminen con el grado de detalle que se acaba de reseñar.

v. Excepción de prescripción de la acción

En cuanto a la excepción de prescripción, la Corte Suprema de Justicia, en los pronunciamientos SL1688-2019, SL373-2021 y SL4062-2021, ha señalado que la prosperidad de la pretensión de ineficacia del traslado es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, si este no produjo efectos, el transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de sanear la falencia encontrada, postura que comparte esta Sala, por lo que debe decirse que esa excepción no está llamada a prosperar. En todo caso, respecto de los conceptos que el fondo privado ha de devolver a Colpensiones, por tratarse de sumas indispensables para la consolidación y financiación de las prestaciones pensionales, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidos a prescripción, tal y como lo señala la sentencia CSJ SL1473-2021.

Con los argumentos anteriores, y atendiendo al principio de consonancia de que trata el art. 66A del CPTSS, modificado por el 35

de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

En conclusión, la sentencia de primera instancia, revisada por vía de apelación y en el grado jurisdiccional de consulta, deberá revocarse.

Las costas procesales de la primera instancia serán a cargo de Porvenir SA. Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se REVOCA en todas sus partes la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: En su lugar, se declara la ineficacia de la afiliación a PORVENIR SA, de la señora Claudia Rocío Salazar López, debiéndose tener para todos los efectos afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES.

TERCERO: En consecuencia, se ordena a Porvenir SA, que devuelva a Colpensiones todos los valores que recibió con motivo de la afiliación, esto es, las cotizaciones realizadas en su cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros, los gastos de administración, que se componen del pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros del Fogafin siempre y cuando dentro del período de afiliación se realizaran estos descuentos y los pagos correspondientes a la AFP por su gestión, todos estos rubros debidamente indexados con cargo a sus propios recursos; también debe devolver los dineros destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, conforme lo dispone el art. 7 del Decreto 3995 de 2008.

CUARTO: Se ORDENA a Porvenir SA que, al momento de cumplir la orden de trasladar las sumas recibidas con motivo de la afiliación del demandante, estos conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

QUINTO: Se ordena a Colpensiones que active la afiliación de la demandante, sin solución de continuidad, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y que reciba las sumas de dinero devueltas por los fondos privados, para proceder a consolidar los recursos y la información en la historia laboral.

SEXTO: Costas procesales, como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por EDICTO. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación, se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados,



HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ